

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1993/23
29 de junio de 1993

ESPAÑOL
Original: ESPAÑOL/FRANCES/
INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
45º período de sesiones
Tema 10 b) del programa

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS:
CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Sexto informe anual y lista de Estados que desde el 1º de enero
de 1985 han proclamado, prorrogado o levantado el estado de
excepción, presentado por el Sr. Leandro Despouy, Relator
Especial, nombrado en cumplimiento de la resolución 1985/37
del Consejo Económico y Social

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1 - 9	3
I. LISTA DE ESTADOS QUE DESDE EL 1º DE ENERO DE 1985, HAN PROCLAMADO, PRORROGADO O SUSPENDIDO EL ESTADO DE EXCEPCION	10 - 16	5
II. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	17 - 20	37
III. ESTADOS DE EXCEPCION DE HECHO	21 - 45	39
IV. FUNCIONES DEL PARLAMENTO DURANTE UN ESTADO DE EXCEPCION	46 - 77	45

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
V. ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL RELATOR ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU METODO DE TRABAJO	78 - 96	52
A. Servicios de asesoramiento	78 - 83	52
B. Rectificaciones a las listas de Estados incluidos en los informes anuales cuarto y quinto	84 - 85	53
C. Carta a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos	86 - 87	53
D. Base de datos sobre los estados de excepción .	88 - 95	54
E. Directrices referentes a las disposiciones legislativas nacionales y a la cuestión de los derechos que no pueden ser objeto de derogación	96	56
<u>Anexos</u>		
I. Lista de las respuestas y otras comunicacioens recibidas . .		57
II. Lista de comunicaciones especializadas recibidas de Amnistía Internacional		59

INTRODUCCION

1. En su resolución 10 (XXX), de 31 de agosto de 1977, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías se declaró profundamente preocupada ante la aplicación que se da en ciertos países a las disposiciones relativas a las situaciones llamadas de estado de sitio o de excepción. Convencida de que hay una relación entre esa aplicación y la situación de los derechos humanos en esos países, estimó que un estudio detenido de las consecuencias que para los derechos humanos tienen los últimos acontecimientos registrados en esa esfera sería útil para la consecución de los objetivos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. La Sra. Nicole Questiaux presentó el estudio completo a la Subcomisión en su 35º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1982/15).

2. En su resolución 1983/18, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Subcomisión que propusiera, para que la Comisión las examinara, medidas encaminadas a asegurar el respeto en todo el mundo de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las situaciones en que existiesen estados de sitio o de excepción, y en especial el respeto de los derechos mencionados en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. En su resolución 1983/30, la Subcomisión decidió incluir en su programa un tema titulado "El ejercicio del derecho de suspensión previsto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la violación de los derechos humanos" 1/.

4. A solicitud de la Subcomisión, el Consejo Económico y Social, por su resolución 1985/37, autorizó a la Subcomisión a que designara un relator especial para que llevara a cabo la labor mencionada en la resolución 1983/18 de la Comisión y en la resolución 1983/30 de la Subcomisión.

5. El mandato del Relator Especial para esa tarea, Sr. Leandro Despouy, definido en esas resoluciones así como en las resoluciones 1985/32, 1987/25, 1988/24, 1989/28, 1990/19, 1991/18 y 1992/22, de la Subcomisión, incluye las tareas principales siguientes: a) establecer y actualizar todos los años una lista de los países que proclaman o suspenden un estado de excepción; b) examinar, en informes anuales, cuestiones relativas al respeto por parte de los Estados de las normas internas e internacionales que garantizan la legalidad de la aplicación del estado de excepción; c) estudiar las repercusiones de las medidas de excepción sobre los derechos humanos; d) recomendar medidas concretas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos en situaciones de estado de sitio o de excepción.

1/ Posteriormente, en su resolución 1987/25, la Subcomisión decidió examinar esta cuestión, como asunto de gran prioridad, en el marco del tema del programa titulado "La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: b) Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción".

6. El Relator Especial ha presentado a la Subcomisión y a la Comisión de Derechos Humanos un documento explicativo (E/CN.4/Sub.2/1985/19) y sus informes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y las listas de Estados que, desde el 1º de enero de 1985, han proclamado, prorrogado o suspendido el estado de excepción, incluidas las versiones revisadas y actualizadas de esos informes (E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1 y Add.1 y 2; E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1; E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2; E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1; E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1).

7. En cumplimiento de la petición contenida en la decisión 1991/262 del Consejo Económico y Social, el Relator Especial presentó a la Subcomisión y a la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de directrices para la elaboración de disposiciones legislativas relativas a los estados de excepción, que figuraban en el anexo I de su cuarto informe anual (E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1).

8. Por su resolución 1993/42, la Comisión de Derechos Humanos, tomando nota de la resolución 1992/22 de la Subcomisión, recomendó al Consejo Económico y Social que hiciera suya la petición de la Subcomisión al Sr. Leandro Despouy, Relator Especial sobre los derechos humanos y los estados de excepción, para que continuara actualizando la lista de los estados de excepción y presentara en su informe anual a la Subcomisión y a la Comisión de Derechos Humanos recomendaciones sobre los derechos no inalienables o no susceptibles de suspensión.

9. El presente sexto informe anual se ha preparado en cumplimiento de esa resolución y de otras resoluciones y decisiones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión.

I. LISTA DE ESTADOS QUE DESDE EL 1º DE ENERO DE 1985, HAN PROCLAMADO,
PRORROGADO O SUSPENDIDO EL ESTADO DE EXCEPCION

10. Al elaborar la presente lista de Estados que han proclamado, prorrogado o suspendido el estado de excepción, el Relator Especial se ha esforzado por ofrecer a la Subcomisión y a la Comisión un panorama lo más completo posible -dentro de los límites de las informaciones de que disponía- de la situación mundial en materia de estados de excepción a partir del 1º de enero de 1985. La lista compuesta contiene un resumen de información ya incluida en sus cinco informes anteriores, así como la información reciente recibida de los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, comunicada por organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, y publicada en la prensa desde noviembre de 1992, fecha en que se publicó su quinto informe revisado.

11. El objetivo de esta recapitulación no es otro que el de ofrecer una visión global de la situación de los estados de excepción en el mundo y a la vez perfeccionar la lista preparada por el Relator Especial. Para ello es indispensable contar una vez más con la colaboración de los gobiernos interesados, las organizaciones no gubernamentales y todos aquellos que puedan aportar información fidedigna que permita corregir los errores o salvar las omisiones que ella pueda contener.

12. El Relator Especial solicita periódicamente información a todos los gobiernos, órganos competentes de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales interesadas. La última carta en que solicitó información tenía fecha 4 de diciembre de 1992. En el anexo I figura una lista de las respuestas y demás comunicaciones recibidas.

13. El Relator Especial, cada vez que ha tomado conocimiento, generalmente, a través de la prensa internacional, de que un determinado gobierno había adoptado medidas de emergencia que implicaran prima facie restricciones al ejercicio de los derechos humanos (suspensión parcial de la Constitución, toque de queda, etc.) se ha dirigido de inmediato a dicho gobierno, por conducto del Secretario General, y le ha solicitado información precisa y detallada acerca del carácter de las medidas en vigor, la base jurídica en que se asientan y, sobre todo, el impacto que tienen o han tenido sobre el conjunto de los derechos humanos.

14. Al elaborar esta lista el Relator Especial ha tenido también en cuenta aquellos países en que existe y se aplica una legislación ordinaria que faculta al poder ejecutivo para adoptar medidas de excepción (como la detención administrativa o ministerial por largos períodos de tiempo) sin que sea necesario para ello proclamar oficialmente el estado de excepción.

15. De conformidad con la información de que dispone el Relator Especial, desde el 1º de enero de 1985 en los 83 Estados y territorios siguientes se han adoptado medidas que constituyen la proclamación, prórroga, mantenimiento o suspensión de regímenes de excepción en diversas formas:

Afganistán: Estado de excepción proclamado el 19 de febrero de 1989. Levantado el 28 de mayo de 1990.

Fuentes: Informes interinos sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, preparados por el Sr. F. Ermacora, Relator Especial de la Comisión de Derechos humanos (documentos A/44/669, párr. 20 e) y A/45/664, párr. 36).

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Argelia*: Estado de sitio proclamado el 6 de octubre de 1988. Terminado el 12 de octubre de 1988.

Estado de sitio decretado el 4 de junio de 1991 por un período de cuatro meses. Levantado el 29 de septiembre de 1991.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 28 de abril de 1989; notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 19 de junio y 3 de octubre de 1991.

Estado de excepción proclamado el 9 de febrero de 1992 por un período de 12 meses. El 2 de diciembre de 1992 se decretó el toque de queda por un período indefinido. El 7 de febrero de 1993, se prorrogó indefinidamente el estado de excepción.

Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario de las Naciones Unidas de fecha 13 de febrero de 1992; información publicada en la prensa.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

* El asterisco al lado del nombre de un país o territorio indica que aún rige el estado de excepción.

Argentina:

Estado de sitio proclamado el 25 de octubre de 1985 por 60 días. Terminado el 7 de diciembre de 1985.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 12 de agosto de 1987.

Estado de sitio proclamado el 29 de mayo de 1989 por 30 días. Levantado el 27 de junio de 1989.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 7 de junio y 11 de julio de 1989.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 45, 49, 56 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Armenia:

Desde el 15 de enero de 1990 rige el estado de excepción en la región de Gorissa de la RSS de Armenia.

Fuentes: Notificación del Gobierno de la URSS al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 16 de enero de 1990.

El 29 de agosto de 1990 se declaró el estado de excepción y se implantó el toque de queda en todo el territorio de la República. Se levantó el 16 de agosto de 1991.

El 16 de diciembre de 1991 se declaró el estado de excepción y se implantó el toque de queda en la región de Meghri, Armenia, por un período de tres meses.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. Por carta de 19 de mayo de 1992, dirigida al Gobierno de Armenia, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

El 19 de junio de 1992 se decretó nuevamente el estado de excepción, por otros tres meses, en las regiones de Meghri y Kapan de Armenia meridional.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 10 de julio de 1992 recibida en respuesta a la solicitud de información del Relator Especial.

En febrero de 1993 se decretó el estado de excepción en el distrito de Armavir de Armenia por un período de un mes.

Fuentes: Información publicada en la prensa.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 17.)

Azerbaiyán*:

Estado de excepción impuesto en la región autónoma de Nagorno-Karabaj y el distrito de Agdam de la RSS de Azerbaiyán a partir del 21 de septiembre de 1988. Desde el 15 de enero de 1990 rige el estado de excepción en el territorio de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, las regiones de la RSS de Azerbaiyán colindantes, y la zona que bordea la frontera nacional de la URSS en el territorio de la RSS de Azerbaiyán.

El 20 de enero se declaró el estado de excepción en la ciudad de Baku. Se levantó en agosto de 1991.

En junio de 1990 se implantó el estado de excepción en la RSS de Azerbaiyán a lo largo de su frontera con la RSS de Armenia.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno de la URSS al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 13 de octubre de 1988 y 15 y 29 de enero de 1990; información publicada en la prensa.

El 14 de mayo de 1992 se decretó el estado de excepción por un período de dos meses y se implantó el toque de queda en la ciudad de Baku.

Fuentes: Información publicada en la prensa. Por carta de 19 de mayo de 1992, dirigida al Gobierno de la República de Azerbaiyán, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

En marzo de 1993 se declaró el estado de excepción en tres distritos de la República por un período de un mes.

El 2 de abril de 1993 se declaró el estado de excepción en todo el territorio de la República.

El 9 de abril de 1993 se implantó el toque de queda en Baku y otras ciudades y distritos.

En mayo de 1993, se prolongó el estado de excepción por otros dos meses.

Fuentes: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, anexo I; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12); quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Bangladesh:

Ley marcial proclamada el 24 de marzo de 1982. Terminada el 10 de noviembre de 1986.

Estado de excepción declarado el 27 de noviembre de 1990. Levantado el 6 de diciembre de 1990.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fecha 22 de julio de 1987 y 1º de abril de 1993.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/Rev.1, párrs. 18 y 27; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Bolivia:

Estado de excepción proclamado el 18 de septiembre de 1985. Terminado el 19 de diciembre de 1985.

Estado de excepción proclamado el 27 de agosto de 1986. Terminado el 27 de noviembre de 1986.

Estado de excepción proclamado el 15 de noviembre de 1989. Terminado el 15 de febrero de 1990.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 27 de septiembre y 29 de octubre de 1985, 6 de enero, 28 de agosto y 28 de noviembre de 1986, 16 de noviembre y 8 de diciembre de 1989 y 18 de marzo de 1990.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 27 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; tercer informe,

E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24;
cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12;
quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Bosnia y Herzegovina*: Este Estado de reciente creación, admitido en las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, se encontró en un estado de excepción de facto en el momento de su transición a la independencia. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Brunei Darussalam*: Estado de excepción proclamado el 12 de diciembre de 1962. Aún vigente.

Fuentes: Cartas del Gobierno, la última de fecha 4 de abril de 1991.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Burkina Faso: Una sucesión de regímenes de excepción y situaciones comparables a los estados de excepción vigentes desde noviembre de 1980.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 30 de abril de 1991.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Camerún: Estado de excepción proclamado el 18 de abril de 1984. Levantado el 19 de diciembre de 1991.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales.

Del 27 de octubre al 29 de diciembre de 1992 se implantó el estado de excepción en la provincia noroccidental del país.

Fuente: Carta del Gobierno de fecha 29 de diciembre de 1992.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Canadá:

Estado de excepción declarado el 23 de julio de 1989 en toda la provincia de Manitoba. Terminado el 4 de agosto de 1989.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 24 de agosto de 1989.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 15.)

Colombia*:

Estado de sitio proclamado el 1º de mayo de 1984. Levantado el 7 de julio de 1991.

Estado de conmoción interior decretado del 10 al 16 de julio de 1992 y del 8 de noviembre de 1992 al 6 de febrero de 1993. El 5 de febrero de 1993 se decretaron otras medidas en relación con el estado de conmoción interior.

En su próximo informe, el Relator Especial dará más pormenores respecto de las medidas de excepción y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 7 de mayo y 11 de diciembre de 1984, 9 de agosto de 1991 y 16 de julio y 10 de noviembre de 1992; cartas del Gobierno de fechas 21 de diciembre de 1987, 13 de julio de 1988, 18 de abril de 1989, 16 de septiembre de 1991, 24 de julio y 11 de noviembre de 1992 y 27 de enero y 27 de abril de 1993.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 44; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Croacia*:

Este Estado de reciente creación, admitido en las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, se encontró en un estado de excepción de facto en el momento de su transición a la independencia. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Chad:

No se ha proclamado oficialmente ningún estado de excepción desde el 1º de enero de 1985. Sin embargo, un decreto de fecha 7 de abril de 1988 restringió por una semana el ejercicio de algunos derechos humanos y libertades fundamentales.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 20 de julio de 1988 y 5 de febrero de 1991.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 25; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Chile:

Proclamación del estado de sitio (del 7 de noviembre de 1984 al 17 de junio de 1985 y del 8 de septiembre de 1986 al 5 de enero de 1987), del estado de excepción (del 24 de marzo de 1984 al 27 de agosto de 1988) y del estado de peligro de perturbación del orden público (del 11 de marzo de 1981 al 27 de agosto de 1988).

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas, entre otras, 17 de junio de 1985, 22 de septiembre de 1986, 20 de enero de 1987 y 31 de agosto de 1988; cartas del Gobierno de fechas 10 de agosto de 1989, 21 de febrero de 1991 y 28 de abril de 1993.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 41 y anexo I; E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1/Add.1, anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18, 22, 27, 28 y 71; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

China:

Ley marcial impuesta en Lhasa, Tíbet, el 8 de marzo de 1989. Levantada el 1º de mayo de 1990.

Ley marcial impuesta en Beijing el 20 de mayo de 1989. Levantada el 11 de enero de 1990.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 8 de mayo y 15 de agosto de 1989. Carta de fecha 12 de enero de 1990 del Representante Permanente de China (reproducida en el documento E/CN.4/1990/55); información recibida de organizaciones no gubernamentales y otra información publicada en la prensa.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Djibouti:

El 16 de noviembre de 1991, se implantó el toque de queda en el distrito de Obock.

Fuentes: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Ecuador:

Proclamación reiterada del estado de excepción nacional (14 a 17 de marzo de 1986, 28 a 30 de octubre de 1988, 31 de mayo a 1º de junio de 1988 y 27 de septiembre a 13 de octubre de 1989).

Fuentes: Cartas del Gobierno (la última de fecha 12 de enero de 1990); notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 14 y 18 de marzo de 1986, 28 y 30 de octubre de 1987, 1º y 2 de junio de 1988 y 2 de agosto de 1989.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 28 y anexo I; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Egipto*:

Estado de excepción vigente desde el 6 de octubre de 1981. Fue prorrogado por un período de tres años del 1º de mayo de 1988 al 31 de mayo de 1991.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 28 de marzo de 1991; información recibida de organizaciones no gubernamentales.

El 1º de junio de 1991 la ley marcial fue prorrogada por otros tres años.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

El Salvador:

Suspensión de determinadas garantías constitucionales desde el 6 de marzo de 1980. Prórrogas sucesivas de la ley marcial en 1984-1985. Terminación del estado de excepción el 12 de enero de 1987. Nueva suspensión de las garantías constitucionales el 12 de noviembre de 1989 por 30 días, prorrogada posteriormente hasta mediados de abril de 1990.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 3 de noviembre de 1983, 14 de junio de 1984, 31 de julio de 1985, 13 de noviembre de 1989 y 5 de enero de 1990; cartas del Gobierno, la última de fecha 18 de agosto de 1989; información recibida de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 41 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24 y anexo I; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Estados Unidos de América:

Estados de excepción proclamados y toques de queda impuestos en Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Atlanta y algunos otros lugares por breves períodos, de fines de abril a principio de mayo de 1992.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 1º de junio de 1992, recibida en respuesta a la solicitud de información del Relator Especial de 18 de mayo de 1992. Información publicada en la prensa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 15 y 25.)

Etiopía:

Se ha informado acerca de la existencia de un estado de excepción de facto desde hace mucho tiempo. Desde mayo de 1988, ha regido el estado de excepción en las regiones de Tigré y Eritrea. Terminado en mayo de 1991.

En mayo de 1991 se implantó el toque de queda en Addis Abeba. Levantado el 31 de mayo de 1992.

Fuentes: Declaración del observador de Etiopía en el 44º período de sesiones de la Subcomisión, el 19 de agosto de 1992. Información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23, párrs. 12 y 31; E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 39 y 40.)

Federación de Rusia*:

El 19 de abril de 1991, se implantó el estado de excepción en Vladikavkaz (Osetia septentrional) por un período de un mes y se prolongó sucesivamente hasta el 19 de septiembre, el 19 de diciembre de 1991, el 19 de abril y el 10 de agosto de 1992.

El 13 de junio de 1991 se implantó el estado de excepción en Makhachkala, la capital de Dagestán, por un período de un mes.

El 19 de agosto de 1991 el entonces recién creado Comité del Estado para Situaciones de Emergencia declaró el estado de excepción en algunas partes de la URSS por seis meses. El 22 de agosto de 1991, el Presidente de la URSS anuló todos los decretos de ese Comité.

Fuentes: Declaración del observador de la URSS en el 43º período de sesiones de la Subcomisión, el 30 de agosto de 1991; información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa.

Del 11 al 28 de septiembre de 1991 estuvo vigente el estado de excepción en el distrito de Kazbek, Dagestán.

Implantación reiterada de estados de excepción en la República Chechena. En su capital, Grozny, se impuso el 10 de febrero de 1992 el toque de queda por 30 días.

En mayo de 1992 se implantó el estado de excepción en Makhachkala y Kizilyourt, ciudades de Dagestán.

Fuentes: Información publicada en la prensa.
Por carta de 19 de mayo de 1992, dirigida al Gobierno de la Federación de Rusia, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción adoptadas en algunas partes del país y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

El 10 de junio de 1992 se implantó el estado de excepción en varios distritos de Osetia septentrional; se impuso el toque de queda en Vladikavkaz.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 21 de julio de 1992.

El 27 de septiembre de 1992 se proclamó el estado de excepción en Nalchik, capital de Kabardino-Balkaria, por un período de dos meses; sin embargo, se suspendió su implantación efectiva.

El 2 de noviembre de 1992 se implantó el estado de excepción en Osetia septentrional y en la República Inguche, por un período de un mes. Más adelante, el estado de excepción se prolongó en reiteradas ocasiones en varios distritos y zonas de Ingushetia y Osetia septentrional (la última vez del 31 de mayo al 31 de julio de 1993).

Fuentes: Notificación del Gobierno de la Federación de Rusia al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 3 de noviembre de 1992; cartas del Gobierno de fechas 4 de noviembre y 21 de diciembre de 1992; información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12 y anexo II; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 16, 17, 22 y 25 a 32.)

Fiji:

Estado de excepción público proclamado el 14 de mayo de 1987. Terminado el 5 de diciembre de 1987.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 6 de noviembre y 7 de diciembre de 1989.

(Informe inicial E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Filipinas:

En febrero de 1986 se proclamaron estados de excepción de hecho, sólo de algunos días de duración, durante la revolución y en el momento de la tentativa de golpe de Estado de 28 de agosto de 1987.

Estado de excepción nacional proclamado el 6 de diciembre de 1989. Terminado el 7 de junio de 1990.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 10 de diciembre de 1987, 2 de abril de 1991 y 21 de septiembre de 1992.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 22; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 37 y 38.)

Francia:

Estado de excepción proclamado en Nueva Caledonia y dependencias el 12 de enero de 1985. Prorrogado hasta el 30 de junio de 1985.

Estado de excepción proclamado en Wallis y Futuna el 29 de octubre de 1986. Terminado el 30 de octubre de 1986.

Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario General del Consejo de Europa; carta del Gobierno de fecha 9 de julio de 1987.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 49 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Gabón:

Estado de sitio declarado en la provincia de Port-Gentil. Toque de queda vigente desde mayo de 1990. Terminado en agosto de 1990.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Gambia:

Estado de excepción proclamado el 2 de agosto de 1981.
Terminado el 8 de febrero de 1985.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 27; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Georgia*:

El 18 de julio de 1989 se implantó un "régimen especial de conducta de los ciudadanos" en la República Autónoma de Abkhaz.

El 12 de diciembre de 1990 se implantó y ulteriormente se prorrogó el estado de excepción en Tskhinvali y Dzhavski (Osetia meridional).

En septiembre de 1991 se implantó el estado de excepción en Tbilisi, capital de Georgia.

En enero de 1992 se declaró el estado de excepción y se implantó el toque de queda en Kutaisi y varios distritos de Georgia occidental.

Fuentes: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. Por carta de 19 de mayo de 1992, dirigida al Gobierno de Georgia, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Guatemala*:

El 25 de mayo de 1993, durante la crisis constitucional, se suspendieron muchas garantías constitucionales.

Fuentes: Información publicada en la prensa. Por carta de fecha 17 de junio de 1993, dirigida al Gobierno de Guatemala, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

Guyana: Estado de excepción declarado el 28 de noviembre de 1992.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 24 de marzo de 1993.

Haití*: Estado de sitio proclamado el 29 de enero de 1986. Terminado el 14 de febrero de 1986.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fecha 10 de junio de 1987 y 16 de marzo de 1989.

Estado de sitio implantado el 20 de enero de 1990. Levantado el 30 de enero de 1990.

Fuentes: Resolución 1990/56 de la Comisión de Derechos Humanos, de 7 de marzo de 1990; informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití, preparados por el Sr. P. Texier, experto independiente (E/CN.4/1990/44/Add.1, párrs. 1 y 20; E/CN.4/1991/33, párrs. 3, 11 y 125).

En septiembre de 1991, se implantó el toque de queda en Puerto Príncipe. Por carta de 22 de octubre de 1991 dirigida al Gobierno de Haití, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y sus repercusiones sobre los derechos humanos.

No habiendo recibido respuesta de las autoridades de la capital y teniendo información fidedigna respecto de la situación de excepción de facto que existe en Haití, el Relator Especial ha iniciado un estudio de la cuestión (véase el capítulo III del presente informe).

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 41 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Honduras: Estado de excepción proclamado el 8 de abril de 1988. Terminado el 13 de abril de 1988.

Fuentes: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

India:

El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa sobre las medidas adoptadas en Cachemira, Punjab, zonas del noreste de Andhra Pradesh, donde, según fuentes no gubernamentales, se habrían suspendido ciertas garantías constitucionales en virtud de leyes especiales que de hecho establecen un estado de excepción continuo. Asimismo, se informó en la prensa de que en otras regiones también se había impuesto el toque de queda por períodos breves.

El 7 de diciembre de 1992 se implantó el toque de queda por un período indefinido en partes del viejo Delhi. También se decretó el toque de queda en otras grandes ciudades.

Fuentes: Información publicada en la prensa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Iraq:

El Relator Especial esperaba que el Gobierno le presentara información sobre las medidas de excepción adoptadas durante el conflicto armado y posteriormente, así como en relación con los sucesos ocurridos en las provincias curdas.

En una carta de fecha 4 de marzo de 1993, el Gobierno del Iraq señaló, entre otras cosas, que "a pesar de la situación excepcional que imperaba a causa de la agresión perpetrada contra él por una treintena de países y a pesar de los trastornos que eso provocó, el Iraq no había decretado el estado de excepción, entorpecido la aplicación de los artículos de la Constitución o de las leyes, ni había tomado medidas que pudieran atentar contra el respeto de los derechos humanos en general.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 4 de marzo de 1993. Informes sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq, preparados por el Sr. Max van der Stoep, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos (documentos A/46/647, párr. 60; E/CN.4/1992/31, párrs. 22 a 39 y 151); nota verbal de fecha 3 de julio de 1991 dirigida al Centro de Derechos

Humanos por la Misión Permanente del Iraq (transcrita en el documento E/CN.4/Sub.2/1991/51; carta del Gobierno de 21 de diciembre de 1987).

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Israel*:

Estado de excepción vigente desde mayo de 1948.

Fuentes: Notificación enviada al Secretario General por el Gobierno el 3 de octubre de 1991; carta del Gobierno de fecha 28 de mayo de 1991.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1/Add.2, cap. V; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Territorios
ocupados por
Israel*:

Legislación de excepción en vigor.

Toque de queda en la Faja de Gaza y la Ribera Occidental desde diciembre de 1992.

Fuentes: Informes de las Naciones Unidas e información recibida de organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. El Relator Especial espera recibir información más precisa del Gobierno de Israel acerca de las medidas de excepción y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 41 y 42.)

Jordania:

Ley marcial declarada el 5 de junio de 1967.

La decisión del Gobierno de derogar la ley marcial, fue refrendada por Real Decreto de 7 de julio de 1991.

Fuentes: Informes de Jordania al Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/1/Add.55 y 56 y CCPR/C/46/Add.4; A/46/40, párr. 578). Información recibida de organizaciones no gubernamentales.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Kazajstán:

El 19 de junio de 1989 se implantó el toque de queda en la ciudad de Novy Uzen, distrito de Guriev. Levantado el 24 de julio de 1989.

Fuentes: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Kenya:

Según una fuente no gubernamental, en la parte nororiental del país estuvo vigente un prolongado estado de excepción hasta comienzos de 1992. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa, especialmente en relación con la ley en materia de detención actualmente en vigor, análoga a una ley de excepción.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Kirguistán*:

Estado de excepción vigente desde el 7 de junio hasta el 21 de noviembre de 1990 en la capital, Frunze (llamada ahora Bishkek).

El 4 y el 7 de junio de 1990 se decretó el estado de excepción y se impuso el toque de queda en la ciudad y en la región de Osh. Siguen en vigor. Levantados parcialmente el 14 de septiembre de 1991. En enero de 1993 se implantó en la región de Osh un régimen especial de entradas y salidas.

Fuentes: Información recibida de una organización no gubernamental y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Kuwait:

En febrero de 1991, se declaró la ley marcial por un período de tres meses. Más adelante se prorrogó hasta el 26 de junio de 1991.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12;
quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Lesotho:

Estado de excepción declarado el 25 de febrero de 1988.
Reinstaurado el 2 de mayo de 1988. Levantado a
principios de 1990.

Fuentes: Información de una organización no
gubernamental. El Relator Especial espera que el
Gobierno le presente información más precisa.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/Rev.1, párr. 18;
cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12;
quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Liberia*:

Suspensión de algunas garantías constitucionales desde
julio de 1990. Toque de queda implantado en la
capital.

Fuentes: Información publicada en la prensa.
El Relator Especial espera que el Gobierno le presente
información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12;
quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Madagascar*:

Estado de excepción declarado el 23 de julio de 1991 y
prorrogado posteriormente. Toque de queda implantado
en la capital.

Fuentes: Información publicada en la prensa.
El Relator Especial espera que el Gobierno le presente
información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12;
quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Malasia:

Estado de excepción proclamado en todo el país el 15 de
mayo de 1969. Legislación de excepción actualmente en
vigor que prevé expresamente la prisión preventiva.

Fuentes: Información de organizaciones no
gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1,
párrs. 30, 41 y anexo I; segundo informe,
E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe,
E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe,
E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Malawi: Legislación de excepción vigente desde 1965, que prevé expresamente la prisión preventiva.

Fuentes: Información de una organización no gubernamental. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Malí*: Estado de excepción declarado el 22 de marzo de 1991.

Fuentes: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Mauritania: Toque de queda implantado en las zonas rurales del sur. Se ha informado de la existencia de un estado de excepción de hecho en el valle del río Senegal. En octubre de 1992 se impuso el toque de queda en la capital.

Fuentes: Información publicada en la prensa y enviada por organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Moldova: Estado de excepción vigente desde el 26 de octubre hasta el 6 de diciembre de 1990 en varios distritos del sur.

El 16 de marzo de 1992 se implantó un régimen de "situación especial" en la ribera izquierda del río Dniéster. Dejó de aplicarse en septiembre de 1992.

El 28 de marzo de 1992 se decretó el estado de excepción en todo el territorio de la República. Levantado el 19 de agosto de 1992.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 25 de junio de 1992, recibida en respuesta a la solicitud de

información del Relator Especial; información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Myanmar*:

Estado de excepción proclamado en Prome el 22 de julio de 1988 y en la región de Yangon el 3 de agosto de 1988. Terminado el 24 de agosto de 1988.

La ley marcial implantada el 18 de septiembre de 1988, todavía está vigente. A fines de mayo de 1990 se levantó en 102 municipios.

El toque de queda impuesto el 10 de octubre de 1990 se levantó el 10 de septiembre de 1992.

El 26 de septiembre de 1992, se revocaron dos órdenes de ley marcial de 17 y 18 de julio de 1989.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 29 de mayo y 24 de agosto de 1987; 16 de mayo y 17 de agosto de 1989; 26 de enero, 21 de marzo, 7 de mayo y 14 de junio de 1990, 4 de marzo de 1991, 18 de agosto, 28 de septiembre de 1992, 7 y 19 de octubre de 1992 y 22 de enero de 1993. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, preparado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1993/37, párr. 242 d), información recibida de organizaciones no gubernamentales.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18, 20 y 28; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Nicaragua:

El estado de excepción estuvo en vigencia, con breves interrupciones, desde el 15 de marzo de 1982 al 19 de enero de 1988, y desde el 20 de octubre al 15 de noviembre de 1988.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas, las más recientes de fechas 4 de febrero, 21 de octubre y 16 de noviembre de 1988.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 27 y anexo I; E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1/Add.2, anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27 y anexo I; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Níger*:

Desde 1992 está en vigor un estado de emergencia en el norte del país.

Fuentes: Información de una organización no gubernamental. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

Nigeria:

Estado de excepción proclamado el 31 de diciembre de 1983. En octubre de 1991 se impuso el toque de queda por un período indefinido en el Estado de Kano.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Pakistán:

La ley marcial estuvo vigente del 5 de julio de 1977 al 30 de diciembre de 1985.

Estado de excepción proclamado el 17 de agosto de 1988. Terminado el 1º de diciembre de 1988.

Fuentes: Cartas del Gobierno, las últimas de fechas 24 de octubre y 5 de diciembre de 1989.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 22, 30, 41 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Panamá:

Estado de excepción proclamado el 10 de junio de 1987. Terminado el 29 de junio de 1987.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 11 y 30 de junio de 1987.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Papua Nueva Guinea: Estado de excepción proclamado el 17 de junio de 1985. Terminado el 21 de octubre de 1985.

Estado de excepción declarado el 26 de junio de 1989. Prorrogado otros dos meses el 12 de enero de 1990.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera información más precisa del Gobierno.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Paraguay: El estado de sitio, que había estado en vigor desde 1954, fue levantado el 9 de abril de 1987.

Fuentes: Cartas del Gobierno, la última de fecha 27 de abril de 1987 (transcrita en el documento E/CN.4/Sub.2/1987/18).

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 40 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 27; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Perú*: El estado de excepción, que se declaró por vez primera en 1981, sigue en vigor en una parte considerable del territorio; periódicamente se comunica la prórroga de los estados de excepción en algunas provincias y departamentos, y la declaración de nuevos estados de excepción.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas (las últimas de fechas 15 de marzo y 20 de junio de 1991); cartas del Gobierno dirigidas al Centro de Derechos Humanos (las últimas de fechas 1º y 23 de octubre, 4 y 13 de noviembre de 1991; 15, 21, 23 y 27 de enero, 16, 18 y 27 de marzo, 3 de abril y 25 de agosto de 1992).

El 5 de abril de 1992 el Presidente de la República disolvió el Parlamento y suspendió, temporal y parcialmente, la Constitución en todo el territorio del Perú.

Fuentes: Información publicada en la prensa y enviada por organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa acerca de las medidas de excepción tomadas recientemente y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 43 y anexo I; E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1/Add.1, anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 24 y anexo I; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13, 33 y 34.)

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte*:

Desde 1974 existe una situación de excepción pública relacionada con los problemas de Irlanda del Norte.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 23 de diciembre de 1988 y 23 de marzo de 1989; comunicación del Gobierno recibida por el Secretario General el 18 de diciembre de 1989; informes presentados al Comité de Derechos Humanos (documentos más recientes: CCPR/C/58/Add.6, párrs. 57 a 60; CCPR/C/58/Add.12, párr. 18).

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

República Árabe
Siria*:

Estado de excepción proclamado el 8 de marzo de 1963. Aún vigente.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Información inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Rwanda*: Estado de sitio declarado en octubre de 1990.

Fuentes: Declaración del Ministro de Justicia de Rwanda de 17 de enero de 1991; información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Senegal: Estado de excepción proclamado del 29 de febrero al 20 de mayo de 1988 y del 28 de abril al 19 de mayo de 1989.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 20 de septiembre de 1988, 15 de enero de 1990 y 17 de marzo de 1993.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 28; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Sierra Leona*: Estado de excepción declarado el 2 de noviembre de 1987. Prorrogado el 8 de marzo de 1988.

El 30 de abril de 1992 se declaró el estado de excepción y se impuso el toque de queda.

Fuentes: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. Por carta de 19 de mayo de 1992, dirigida al Gobierno de Sierra Leona, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Segundo informe E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/23/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 25.)

Singapur: Legislación de excepción actualmente en vigor que prevé expresamente la prisión preventiva.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 18 de agosto de 1989; información de organizaciones no gubernamentales.

(Segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Somalia*:

Disposiciones de excepción vigentes en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Fuentes: Información de organizaciones no gubernamentales. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Sri Lanka*:

Estado de excepción proclamado el 18 de mayo de 1983. Terminado el 11 de enero de 1989.

Estado de excepción declarado el 20 de junio de 1989. Aún vigente.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 21 y 23 de mayo de 1984 y 13 de enero y 18 de agosto de 1989; carta del Gobierno de fecha 11 de abril de 1991; informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (E/CN.4/1992/18/Add.1, párrs. 60 a 72 y 195; E/CN.4/1993/25/Add.1, párrs. 16 y 146 a)).

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 41 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Sudáfrica:

El 21 de julio de 1985 se proclamó el estado de excepción en 36 distritos judiciales. Desde el 12 de junio de 1986 ha existido el estado de excepción en todo el país. En 1987, 1988, 1989 y 1990 hubo proclamaciones o prórrogas sucesivas de los estados de excepción y se levantaron algunas disposiciones de excepción.

El 7 de junio de 1990 se levantó el estado de excepción en todo el país, salvo Natal. El levantamiento del estado de excepción en la provincia de Natal se anunció el 18 de octubre de 1990.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 1º de septiembre de 1988 y 6 de julio de 1989 (véase E/CN.4/Sub.2/1989/45); información presentada por el Comité Especial contra el Apartheid; información de organizaciones no gubernamentales.

El 28 de octubre de 1991 se impuso el estado de excepción en todo el territorio de Ciskei.

Fuentes: Informe del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa meridional (E/CN.4/1992/8, párr. 167).

El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1/Add.2, cap. IV.B; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 23; tercer informe E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.1, párr. 18 y anexo I; E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21 y anexo I; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Sudán*:

Estados de excepción proclamados el 6 de abril de 1985, el 25 de julio de 1987 y el 30 de junio de 1989. Aún vigentes.

Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 13 de febrero de 1991; informe del Sudán presentado al Comité de Derechos Humanos, de fecha 15 de febrero de 1991 (documento CCPR/C/45/Add.3); información de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Suriname:

Estado de excepción vigente desde agosto de 1980 hasta el 25 de febrero de 1986. El 1º de diciembre de 1986 se proclamó el estado de excepción en la parte oriental del país. Terminado el 1º de septiembre de 1989.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 5 de diciembre de 1986 (transcrita en el documento A/41/958), 13 de marzo y 24 de junio de 1991; información de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 40 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18 y 22; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Tailandia:

Ley marcial implantada el 23 de febrero de 1991.
Levantada el 3 de mayo de 1991.

El 18 de mayo de 1992, se implantó el estado de excepción en Bangkok y provincias circundantes.
Levantado el 26 de mayo de 1992.

Fuentes: Declaración del observador de Tailandia en el 43º período de sesiones de la Subcomisión, el 22 de agosto de 1991; carta del Gobierno de fecha 22 de julio de 1992, recibida en respuesta a la solicitud de información del Relator Especial de 19 de mayo de 1992. Información publicada en la prensa.

(Cuarto informe, documento E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 25.)

Tayikistán*:

En julio de 1989 se implantó el toque de queda en la región de Isfara.

El 12 de febrero de 1990 se declaró el estado de excepción en la capital, Dushanbe. Levantado el 29 de junio de 1991.

El 23 de septiembre de 1991 se implantó el estado de excepción en toda la República. Levantado el 30 de septiembre de 1991.

Fuentes: Notificación del Gobierno de la URSS al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 23 de marzo de 1990; información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa.

Proclamado el estado de excepción e implantado el toque de queda el 5 de mayo de 1992. Levantados el 7 de mayo de 1992.

En septiembre de 1992 se implantó el estado de excepción en varios distritos y ciudades de las provincias de Kurgan-Tyube y Kuliab.

El 23 de octubre de 1992 se decretó el estado de excepción y toque de queda en la capital, Dushanbe.

El 7 de enero de 1993 se volvió a imponer el estado de excepción y se implantó el toque de queda en Dushanbe por un período de un mes.

Fuentes: Información publicada en la prensa. En dos cartas de fechas 19 de mayo y 28 de octubre de 1992 el Relator Especial pidió una vez más al Gobierno de Tayikistán que proporcionara información acerca de las medidas de excepción y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 31.)

Togo:

En abril y en noviembre de 1991 se implantó el toque de queda en Lomé, capital de la República.

Fuentes: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Trinidad y Tabago:

Estado de excepción proclamado el 28 de julio de 1990 por un período de 90 días y prorrogado después. Estuvo en vigor hasta el 9 de diciembre de 1990.

Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 15 de agosto de 1990; carta del Gobierno de fecha 12 de marzo de 1993.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Turquía*:

La ley marcial, implantada el 26 de diciembre de 1978 en 13 provincias, se proclamó en todo el territorio el 12 de septiembre de 1980. El 1º de enero de 1985, estaba vigente en 34 provincias. El 19 de julio de 1987, se había levantado en todo el país. En 1985-1987, en algunas provincias la ley marcial fue sustituida por un estado de excepción actualmente vigente en 10 provincias del sudeste de Anatolia.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 9 de junio de 1987, 19 de julio de 1988 y 15 de febrero de 1991; información de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párrs. 27, 39, 43 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párr. 18; tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párr. 21; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Uganda:

Se ha informado de la existencia de un estado de excepción de hecho, relacionado en especial con la aplicación de la Ley de orden público y seguridad de 1967.

Fuentes: Información de una organización no gubernamental. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Uzbekistán:

El 4 de junio de 1989 se implantó el toque de queda en varios municipios del distrito de Fergana.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. Por carta dirigida al Gobierno de Uzbekistán el 19 de mayo de 1992 el Relator Especial solicitó información más precisa acerca de las medidas de excepción y de sus repercusiones sobre los derechos humanos.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Venezuela:

El 28 de febrero de 1989 se decretaron medidas de excepción y la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

El 22 de marzo de 1989 se restablecieron todas las garantías constitucionales.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 17 y 31 de marzo de 1989; cartas del Gobierno de fechas 3 y 18 de abril de 1989 y 7 de diciembre de 1990.

El 4 de febrero de 1992 se suspendieron algunas garantías constitucionales. El 13 de febrero de 1992 se decretó el restablecimiento parcial de las garantías

anteriormente suspendidas. Por Decreto de 9 de abril de 1992 el Presidente de la República restableció todas las garantías constitucionales.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 4 y 21 de febrero y 24 de abril de 1992; carta del Gobierno de fecha 11 de febrero de 1992.

El 27 de noviembre de 1992 se suspendieron algunas garantías constitucionales. Por decretos de 1º y 22 de diciembre de 1992 y 16 de enero de 1993 se restablecieron todas las garantías constitucionales.

Del 16 al 25 de enero de 1993 se volvieron a suspender algunas garantías constitucionales en partes del territorio nacional.

Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 1º de abril de 1993; información de organizaciones no gubernamentales.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párrs. 13 y 15.

Yugoslavia*:

El 28 de marzo de 1989 se implantaron en la provincia de Kosovo medidas especiales que entrañaban la suspensión de las libertades de reunión y circulación. El 18 de abril de 1990 fueron levantadas todas las medidas de excepción en el territorio de la provincia.

Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 14 de abril y 29 de mayo de 1989, 19 de marzo y 24 de abril de 1990.

El 18 de octubre de 1991, por decisión de la Presidencia de la RFSY, se estableció la "existencia de una amenaza inmediata de guerra" en todo el territorio del país.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 18 y 21 de febrero de 1992.

Salvo Eslovenia, los otros Estados recién creados de Croacia y Bosnia-Herzegovina que integraban la antigua Yugoslavia, se encontraron en un estado de excepción de hecho en el momento de su transición a la independencia.

(Tercer informe, E/CN.4/Sub.2/1989/30/Rev.2, párrs. 21 y 24; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Zaire:

Por carta de 28 de octubre de 1991, dirigida al Gobierno del Zaire, el Relator Especial solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción adoptadas en relación con los disturbios ocurridos en septiembre en el país, y sus efectos sobre los derechos humanos.

Posteriormente una fuente no gubernamental comunicó al Relator Especial que esas medidas no constituían un estado de excepción y fueron de muy corta duración. En consecuencia, el Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa.

(Cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

Zambia*:

Estado de excepción implantado el 27 de julio de 1964. Levantado en 1991.

Estado de excepción declarado el 4 de marzo de 1993.

Fuentes: Información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente información más precisa en respuesta a su carta de 17 de junio de 1993.

Zimbabwe:

Estado de excepción, vigente desde noviembre de 1965, levantado el 25 de julio de 1990.

Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 23 de marzo y 12 de julio de 1988; información de organizaciones no gubernamentales.

(Informe inicial, E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, párr. 30 y anexo I; segundo informe, E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1, párrs. 18, 26 y 35 y anexo I; cuarto informe, E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 12; quinto informe, E/CN.4/Sub.2/1992/23/Rev.1, párr. 13.)

16. El Relator Especial, consciente de la posibilidad de que no haya llegado a su conocimiento la existencia de algún estado de excepción en otros países, confía en que la cooperación de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en el procedimiento que se está aplicando le permitirá pronto elaborar un cuadro completo de la situación mundial.

II. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

17. En las comunicaciones que el Relator Especial ha recibido de gobiernos y organizaciones internacionales en respuesta a su última solicitud de información (véase el anexo I), así como en diversas declaraciones formuladas durante los últimos períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión, se hicieron diversos comentarios y propuestas respecto del mandato del Relator Especial y de su método de trabajo. A juicio del Relator Especial, algunas de esas propuestas merecen ser señaladas a la atención de la Subcomisión, que tal vez desee tenerlas en cuenta al formular otras directrices con respecto a su actual mandato.

18. A este respecto, el Relator Especial desearía referirse en particular a las propuestas siguientes:

- a) Que en los próximos informes la información sobre los países que han declarado o alzado un estado de excepción se restrinja a lo ocurrido en los últimos dos o tres años. El objetivo es poder visualizar fácilmente si ha habido o no progresos o retrocesos en esta materia entre un año y otro.
- b) Que se trate de considerar en una parte del estudio cuáles son los derechos humanos que más frecuentemente pueden ser afectados por la declaración de estados de excepción.
- c) Probablemente en una etapa más avanzada y en la medida en que los escasos medios con que cuenta el Relator Especial lo permitan, tratar de obtener información no sólo de los derechos que pueden ser afectados por la declaración de un estado de urgencia, sino sobre todo de aquellos que lo son efectivamente; como por ejemplo, el número de detenidos o expulsados del país, condenados a penas superiores a las que rigen durante los períodos de normalidad o por delitos que sólo pueden ser cometidos en la emergencia; entidad de la legislación dictada en ejercicio de las facultades extraordinarias, etc.
- d) En ulteriores informes el Relator Especial informará a la Subcomisión de las disposiciones de la legislación nacional relativas a los órganos competentes y los procedimientos necesarios para proclamar el estado de excepción.
- e) El Relator Especial seguirá de cerca e informará de la aplicación de la resolución 1992/35 de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se pidió a los Estados que adoptaran un procedimiento de hábeas corpus u otro procedimiento análogo y que mantuvieran ese derecho en todo momento y bajo todas las circunstancias, incluso durante un estado de excepción.
- f) El Relator Especial seguirá desarrollando el sistema de comunicación de urgencia, proporcionando a los gobiernos y organizaciones no

gubernamentales la ocasión de hacer observaciones respecto de la información proporcionada por el otro e incluirá pormenores en sus informes anuales.

- g) En los informes futuros sobre los estados de excepción no sólo se proporcionará una lista de los países en que se ha declarado un estado de excepción, sino que se analizará lo ocurrido en esos países en lo relativo a los derechos humanos, si se han restablecido y en qué medida.
- h) Por último, se propuso que se estableciera un mecanismo de las Naciones Unidas en el marco del Centro de Derechos Humanos en Ginebra con las facultades de supervisión necesarias para cerciorarse de la legitimidad de la declaración del estado de excepción en un determinado país.

19. El Relator Especial ha tomado nota con interés y aprecio de una nueva práctica del Comité de Derechos Humanos que, en su 40º período de sesiones, celebrado en 1990, tras un intercambio de opiniones entre los miembros respecto de los métodos de trabajo en relación con los estados de excepción declarados con arreglo al párrafo 3 del artículo 4 del Pacto, pidió a la Secretaría que en cada período de sesiones le proporcionara una lista actualizada indicando todos los estados de excepción que se hubieran notificado al Secretario General desde el anterior período de sesiones del Comité (A/46/40, párr. 15). El Relator Especial ha sido informado de que esta práctica se ha seguido en todos los períodos de sesiones del Comité de Derechos Humanos celebrados desde entonces.

20. El Relator Especial también ha tomado nota de que en su 47º período de sesiones, celebrado en marzo-abril de 1993, el Comité de Derechos Humanos adoptó una enmienda al artículo 66 de su reglamento, en virtud de la cual se agregó un nuevo párrafo que dispone que, en caso de una situación excepcional y cuando el Comité no esté reunido, por intermedio del Presidente, en consulta con los miembros del Comité, se podrá solicitar que se presente un informe con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del artículo 40 del Pacto.

III. ESTADOS DE EXCEPCION DE HECHO

HAITI

21. En reiteradas oportunidades, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Subcomisión, han solicitado al Relator Especial el examen en profundidad de aquellas situaciones de crisis en las que los gobiernos han adoptado medidas excepcionales, sin que se encuentre en vigor un estado de excepción oficialmente proclamado. Según estas directivas, el estudio debería concentrarse, particularmente, en el impacto negativo que este tipo de prácticas tienen sobre el conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en general.

22. Ya en sus informes precedentes, el Relator Especial ha tenido oportunidad de señalar a la atención de ambas instancias las nefastas consecuencias que estas desviaciones tienen, tanto sobre el orden institucional de los Estados, como sobre el ejercicio de las libertades públicas y privadas, y muy particularmente sobre el imperio del estado de derecho. Efectivamente, este tipo de desviaciones o anomalías se presentan con alarmante frecuencia y son resultado del incumplimiento de un requisito esencial de los estados de excepción que es la proclamación oficial de éste, a través de un acto de publicidad, cuyo objetivo es el de poner en conocimiento de la población las razones que lo motivan y los derechos o garantías que se suspenden. Además, esta formalidad obra a la manera de un verdadero mecanismo de control institucional, en la medida en que todas las legislaciones nacionales determinan con precisión el órgano facultado para hacerlo.

23. En la práctica, los estados de excepción de hecho pueden derivar de dos irregularidades distintas, aunque ambas conducen a un mismo resultado: sea a) mediante la adopción de medidas excepcionales sin que exista un estado de excepción previamente proclamado, sea, b) a través del mantenimiento en vigor de medidas excepcionales, con posterioridad al levantamiento oficial del mismo. Tanto en una como en otra circunstancia, las consecuencias jurídicas son similares, pues se trata de la ruptura del principio de legalidad, debido al incumplimiento de uno de sus principales requisitos: la proclamación.

24. Como se recordará, ya en el caso de Chipre, la Comisión Europea de Derechos Humanos puso de manifiesto la necesidad de dar cumplimiento a esta exigencia de forma, como requisito previo para ejercer el derecho de derogación que autoriza la Convención Europea de Derechos Humanos en caso de estado de excepción. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en reiteradas oportunidades ha puesto de relieve la validez jurídica de este principio. Así por ejemplo, durante el examen de los informes iniciales presentados por Colombia y Suriname. En este último caso, ante las preguntas insistentes de los expertos acerca del evidente incumplimiento de este requisito, el representante del Gobierno de Suriname se vio en la obligación de reconocer que, efectivamente, durante los acontecimientos que se desarrollaron en 1980, oportunidad en que tuvo lugar un golpe de Estado, todo

el país se encontró bajo un estado de excepción de hecho, pues se habían adoptado medidas excepcionales sin que el estado de sitio hubiese sido oficialmente declarado.

25. Sin embargo, más allá de lo estrictamente jurídico e institucional, lo que es importante resaltar en esta ocasión es el proceso de degradación que, en forma inevitable, engendran este tipo de desviaciones o anomalías. La situación en Haití es un claro ejemplo de ello, razón por la cual el Relator Especial ha considerado oportuno pasar revista en forma pormenorizada a las múltiples violaciones de los derechos humanos que se producen en dicho país. El propósito de este estudio no es otro que dar respuesta a la solicitud de la Comisión y de la Subcomisión, y de ilustrar con este caso el profundo deterioro que generan los llamados "estados de excepción de facto".

A. Marco jurídico de referencia

26. Siguiendo el modelo de la constitución francesa y de otras latinoamericanas, la Constitución Nacional de Haití del 28 de marzo de 1987 contempla una adecuada protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por su parte, los artículos 278 y 278.1-3 regulan el estado de sitio. El primero estipula que: "Sólo en caso de guerra civil o invasión por una fuerza extranjera se podrá declarar el estado de sitio en un lugar o una parte del territorio". El segundo prevé que:

"El acto del Presidente de la República declarando el estado de sitio deberá ser firmado por el Primer Ministro, en nombre de todos los Ministros, y prever la convocación inmediata de la Asamblea Nacional, que deberá pronunciarse sobre la oportunidad de la medida."

El artículo 278-2 exige que:

"La Asamblea Nacional decida, junto con el poder ejecutivo, las garantías constitucionales que se puedan suspender en las zonas del territorio en que se ha declarado el estado de sitio."

Finalmente, el artículo 278-3 establece que:

"El estado de sitio expira si no es renovado por un voto de la Asamblea Nacional cada quince días después de su entrada en vigor."

27. Asimismo, Haití ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que le son aplicables los artículos 4 y 27, respectivamente, que regulan los estados de excepción estableciendo aquellos principios y garantías que todo Estado Parte debe respetar (véase el párrafo 47). Igualmente, la propia Constitución establece que los tratados internacionales debidamente ratificados pasan a formar parte, automáticamente, del derecho interno y son jerárquicamente superiores a la ley nacional. Más aún, según el artículo 19 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos es parte integrante de la misma.

B. Cuadro de violaciones flagrantes y sistemáticas
de los derechos humanos

28. Luego del golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991, en el que las fuerzas armadas de Haití derrocaron al Presidente constitucional de ese país, padre Jean Bertrand Aristide, un sinnúmero de restricciones y limitaciones de los derechos humanos han sido llevados a cabo por parte de las autoridades de hecho, sin que en ningún caso el estado de sitio hay sido oficialmente proclamado.

29. En efecto, tal como señala el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. Marco Tulio Bruni Celli, en su último informe (E/CN.4/1993/47), desde el golpe de Estado de septiembre de 1991 han aumentado en Haití la represión y la violencia. Se informa que a diario se registran actos de hostigamiento, intimidación, agresiones, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y torturas cometidos por los militares y por civiles que colaboran con ellos, y de que tales actos se intensificaron a mediados de mayo de 1992 como reacción frente a las protestas populares.

30. A continuación detallamos algunas de dichas violaciones, utilizando como fuentes, entre otras, el mencionado informe del Relator Especial de la Comisión, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser/L/V/II.83. Doc.18) y las observaciones presentadas a las autoridades militares por parte de los miembros de la Misión Civil Internacional, Organización de los Estados Americanos/Naciones Unidas que se encuentra en Haití.

1. Violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

31. Según la información obtenida por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, desde febrero de 1992 prosiguen las ejecuciones sumarias en Haití, habiéndose recrudecido considerablemente a mediados de mayo a raíz de las manifestaciones populares, que dieron lugar a una intensificación de la represión, sobre todo contra los estudiantes y los habitantes de los barrios pobres. Según testimonios fidedignos, al menos han muerto 1.000 personas desde el golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas haitianas en septiembre de 1991, incluidos los militares, la policía y los civiles que los apoyan, y es probable que sean muchas más. Una fuente ha proporcionado pruebas de 1.021 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre octubre de 1991 y agosto de 1992 y hay indicios que permiten estimar que en realidad fueron 3.000.

2. Violación del derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso

32. Los grupos de derechos humanos que operan en Haití registraron 5.096 casos de detenciones ilegales de octubre de 1991 a noviembre de 1992; el 34% de esas detenciones se produjeron en Puerto Príncipe, el 14,30% en el departamento de Artibonite, el 13,35% en el departamento del Norte, el 12,79% en la región de la meseta central y el 3,02% en el departamento del Sur. El resto está repartido entre las demás regiones del país.

33. En lo que respecta a las violaciones del derecho a la libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido recibiendo denuncias de muchas personas arbitrariamente detenidas por miembros de los servicios de seguridad. En la mayoría de los casos, fueron detenidas sin una orden judicial y fuera de las horas previstas por la ley. Permanecen en prisión durante días y a veces incluso meses, sin comparecer ante un tribunal, en violación del plazo de 48 horas previsto en la Constitución. A veces, las víctimas son puestas en libertad sin que se hayan formulado cargos contra ellas.

3. Violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

34. En Haití los militares, los jefes de sección y sus colaboradores civiles practican corrientemente la tortura y otros actos de brutalidad. Se señala que es habitual que los detenidos reciban palizas cuando se les detiene y cotidianamente en los centros de detención. Según se dice las fuerzas de seguridad también golpean cuando intervienen en una manifestación o cuando irrumpen en los barrios pobres. Es corriente que se golpee a la víctima a ambos lados de la cabeza a la vez, en la espalda y en la parte posterior. Los partidarios conocidos o supuestos del Presidente Aristide y los defensores de los derechos humanos se ven particularmente amenazados. Muchas personas torturadas no han podido recibir atención médica y, al parecer, algunas han fallecido como resultado de los malos tratos que han sufrido.

35. En muchos casos de detención arbitraria a que se refiere el Relator Especial de la Comisión, los interesados han sido maltratados o torturados. Según una organización, el 1º de diciembre de 1992, se habrían documentado 2.000 casos de personas heridas con armas de fuego o aporreadas; esta cifra no incluye a las personas golpeadas en el momento de su detención y después torturadas mientras están detenidas.

4. Violación del derecho a la libertad de opinión y expresión

36. También según información obtenida por el Relator Especial de la Comisión en Haití, desde septiembre de 1991 se atenta seriamente contra la libertad de opinión y expresión. Los periodistas de la prensa escrita y hablada, así como los miembros y dirigentes de los movimientos populares, han sido objeto de amenazas y actos de intimidación y en algunos casos han recibido órdenes de no expresarse libremente. Según otra fuente, actualmente en Haití la libertad de expresión está reprimida como no lo había estado desde la época de Duvalier. En toda la sociedad, la comunicación de información y la expresión de opiniones han pasado a ser actividades arriesgadas, que ponen en peligro la vida del orador y de quienes le escuchan. Según informaciones fidedignas, de septiembre de 1991 a septiembre de 1992, habrían muerto 4 periodistas, otro habría desaparecido y se le da por muerto, y por lo menos 30 habrían sido detenidos. Parecería que 9 emisoras de radio han sido atacadas y vandalizadas y 6 siguen cerradas. Veinticuatro periodistas se habrían visto obligados a salir del país y muchos más están en la clandestinidad.

37. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido recibiendo quejas acerca de las restricciones que se imponen al ejercicio de este derecho y acerca de la represión de que son objeto los periodistas y las emisoras radiofónicas, algunas de las cuales han dejado de transmitir. Algunas emisoras de radio han sido cerradas por los militares y otras han preferido suspender sus emisiones, porque temían por la seguridad de su personal. En las zonas rurales, los jefes de sección han detenido arbitrariamente a todos los que han tratado de difundir información sobre la represión que reina en Haití. Todos los que han seguido trabajando clandestinamente lo hacen con riesgo de su vida.

5. Violación del derecho a la libertad de reunión y asociación

38. Según la Comisión Interamericana y otras fuentes, los militares prohibieron que se celebraran reuniones tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Las reuniones pacíficas de organizaciones populares, campesinos, estudiantes y religiosos han sido violentamente interrumpidas y los participantes detenidos y maltratados. Se han incendiado los locales de estas organizaciones y se han saqueado sus bienes. Muchos miembros de estas organizaciones han huido a otras ciudades y algunos han dejado el país.

39. En el noreste, los grupos de campesinos han tenido que dejar de reunirse. Según los militares, "los campesinos no cumplen ninguna función en política, por lo que no tienen por qué reunirse". A fines de 1991, las autoridades militares informaron a los residentes de las colectividades locales de que debían notificar cualquier reunión al cuartel más próximo de la localidad al menos con tres días de antelación y, además, durante cualquier reunión debía estar presente un soldado. En aplicación de esta política, el 28 y el 29 de abril de 1992, los soldados de la localidad de Desarmes en Artibonite trasladaron a muchos habitantes en una especie de residencia vigilada, porque el comandante de la zona no había sido advertido con antelación de una reunión. En otra colectividad, el ejército dio muerte a tres miembros de la cooperativa agrícola de campesinos y destruyó el local en que se celebraban las reuniones.

40. Ultimamente, la Misión Civil Internacional, Organización de los Estados Americanos/Naciones Unidas en Haití, cuyo mandato consiste en velar por el respeto de los derechos humanos, manifestó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití su profunda preocupación por las múltiples y graves violaciones de que ha tenido conocimiento y que han requerido su intervención en diversas partes del país. Las violaciones de los derechos humanos más graves observadas por la Misión consisten en detenciones arbitrarias, apaleamientos sistemáticos y torturas perpetradas e infligidas por miembros de las fuerzas armadas y colaboradores suyos. La Misión también ha sido informada de casos de muerte a raíz de las torturas infligidas durante la detención. La mayoría de estos atentados contra la integridad y la seguridad de la persona tienen por finalidad limitar, obstaculizar o prohibir la libertad de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica, como se ve claramente en los casos que presenta la Misión, que son de los más graves y más significativos pero que, por desgracia, no dan una idea cabal de la multiplicidad y el alcance de las violaciones.

6. Violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales

41. Haití es el país más pobre de toda América Latina y se encuentra entre los 20 más pobres del planeta. La violenta ruptura del orden institucional y la represión de que ha ido acompañada, no sólo ha entrañado la supresión lisa y llana de la mayoría de los derechos civiles y políticos, sino que también ha traído aparejado un profundo deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales cuya precariedad preexistente se ha visto así sensiblemente agravada.

42. Según ha comprobado el Relator Especial de la Comisión, el ejército ha intervenido sistemáticamente contra los pequeños organismos de autoayuda que fomentan proyectos agrícolas, de alfabetización o de mejora de los barrios. Al parecer los trabajadores sociales laicos y religiosos, los estudiantes, los miembros y los encargados de las organizaciones comunitarias, los trabajadores extranjeros y todo aquel de quien se sospeche que es partidario del padre Aristide habrían sido víctimas de represión y muchos de ellos se han visto obligados a esconderse o a salir del país temiendo por su seguridad. Al parecer, un extranjero que trabajaba para un organismo de ayuda fue detenido simplemente por haber organizado una reunión de personal y otros por haberse reunido con miembros de cooperativas agrícolas.

43. A fines de 1992 se informó al Relator Especial de persecuciones violentas contra los niños de la calle. Según esas informaciones el número de niños que viven en las calles de las ciudades haitianas va en aumento debido a la represión de que son objeto sus familias y también a causa del aumento de la pobreza y de los desplazamientos internos de población. Los albergues para niños organizados por distintas asociaciones serían atacados sistemáticamente por los militares.

44. Según información obtenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la capital del país como en las provincias la población es víctima de la corrupción que ejercen las autoridades de facto y de las extorsiones que practican los militares contra los civiles, que se ven obligados bajo amenazas a darles importantes sumas para no ser detenidos o para no ser maltratados, o simplemente para mejorar las condiciones a que se ven sometidos en los centros de detención e incluso a veces para recuperar su libertad. Debido a la corrupción que hay en la administración de justicia, las víctimas de estos abusos no han podido reivindicar sus garantías judiciales.

45. Por otra parte, el ambiente de temor e inseguridad que reina en Haití ha obligado a gran parte de la población a desplazarse y buscar refugio en las provincias, abandonando así su hogar y escondiéndose en forma permanente. En su anterior informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que estos desplazamientos masivos habían afectado a unas 300.000 personas. En otros casos, muchos haitianos se han visto obligados a huir del país a bordo de embarcaciones peligrosas para pedir asilo en los Estados Unidos.

IV. FUNCIONES DEL PARLAMENTO DURANTE UN ESTADO DE EXCEPCION

A. Informe presentado por el Sr. Leandro Despouy al Simposio Interparlamentario "El Parlamento: guardián de los derechos humanos", celebrado en Budapest del 19 al 22 de mayo de 1993

46. Todos los ordenamientos jurídicos prevén la adopción de medidas especiales para hacer frente a situaciones excepcionales. Aun así, toda suspensión o restricción de derechos necesaria para hacer frente a la crisis sólo puede ser temporal y sólo puede tener por finalidad el restablecimiento de la normalidad y la preservación de los derechos más fundamentales. Por esta razón, la mayoría de los ordenamientos jurídicos y los principales instrumentos internacionales de derechos humanos imponen una serie de condiciones y requisitos que fijan los límites del poder y sirve de garantía para preservar los derechos humanos durante una situación de crisis.

47. Los principios internacionales que han surgido en materia de estados de excepción son los siguientes:

- i) El principio de legalidad, que se refiere a la concordancia que debe haber entre la declaración del estado de excepción y las medidas de excepción adoptadas, por una parte, y entre la declaración del estado de excepción y la legislación interna del país, por la otra; este principio guarda relación además con la necesaria compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional;
- ii) El principio de proclamación, que se refiere a la necesidad de anunciar públicamente la declaración del estado de excepción;
- iii) El principio de comunicación, que se refiere a la obligación de informar debidamente a los demás Estados Partes en la convención pertinente, por intermedio de los depositarios de ese instrumento, así como al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos durante los estados de excepción;
- iv) El principio de temporalidad, que se refiere al carácter excepcional del estado de excepción y a su duración forzosamente limitada en el tiempo ^{1/};
- v) El principio de amenaza excepcional, que exige que la crisis represente un peligro real o por lo menos inminente para la comunidad ^{1/};

^{1/} Ya en 1978, el Consejo Interparlamentario -al examinar las violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios señaladas a su atención por su Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios- afirmó que "del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se desprende... que las medidas de suspensión que autoriza sólo pueden tener carácter excepcional y transitorio".

- vi) El principio de proporcionalidad, que se refiere a la necesidad de que haya una relación proporcional entre la gravedad de la crisis y las medidas adoptadas para hacerle frente;
- vii) El principio de intangibilidad, que se refiere a algunos derechos fundamentales que no se pueden suspender.

48. Es especialmente importante que el Parlamento, guardián de los derechos humanos, no sea la primera víctima de la declaración de un estado de excepción, ya sea en forma de disolución pura y simple o de una suspensión, o de una reducción espectacular de sus poderes legislativos y de control del ejecutivo. Además, es indispensable que el Parlamento pueda desempeñar su función de declarar y levantar el estado de excepción como de determinar los derechos que serán objeto de suspensión y las garantías que deben acompañar esa suspensión. También es indispensable que se preserven los privilegios e inmunidades necesarios del parlamentario en el ejercicio de su mandato.

49. En efecto, por lo menos a tres niveles, es evidente que el Parlamento constituye uno de los ejes esenciales de la preservación de los derechos humanos durante un estado de excepción. El primer nivel guarda relación con el carácter jurídico del estado de excepción como institución ordinaria del Estado de derecho. El segundo se deriva de la necesidad de que el Parlamento intervenga tanto en lo que se refiere a la proclamación y el levantamiento del estado de excepción como durante el período en que está en vigor. El tercero se refiere a la preservación de las garantías propias del parlamentario (inmunidades, etc.) a fin de que el representante del pueblo pueda cumplir las funciones que se le han confiado a pesar de la existencia de una situación de crisis y concretamente durante ésta.

1. Carácter jurídico del estado de excepción

50. "Prever hasta lo imprevisible" esa es, entre otras, la tarea del legislador, que tiene por misión fijar con antelación las normas que regirán la acción del poder en situación de crisis, así como los límites de esa acción.

51. Contrariamente a una creencia excesivamente difundida, el estado de excepción no es el reino de la arbitrariedad. Se trata de una institución del Estado de derecho que comprende un conjunto de normas que sólo deben aplicarse cuando se plantea una situación de crisis y que quedan en una especie de reserva durante los períodos ordinarios. Así pues, independientemente de la dimensión política que se le reconozca, el carácter jurídico del estado de excepción es tal que los actos que lo constituyen (proclamación, ratificación, etc.), así como las medidas que se adoptan mientras está en vigor (suspensión o restricción de algunos derechos, etc.) deben situarse en el marco de los principios que rigen el Estado de derecho y que, por ese motivo, pueden ser objeto de control. Los precedentes y la jurisprudencia de distintos organismos internacionales de protección de los derechos humanos son unánimes a este respecto.

2. Funcionamiento del Parlamento

52. Como es sabido, el principio de la independencia y el equilibrio de los distintos poderes del Estado (y de ahí la existencia de mecanismos internos de control) es consustancial con el Estado de derecho. Por ello, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo se prevé la intervención del Parlamento, ya sea para la proclamación del estado de excepción o para su ratificación una vez decretado por el poder ejecutivo.

53. Esto tiene por objeto evitar que la adopción de una medida tan grave, que suele suponer la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales, no sea competencia exclusiva del poder ejecutivo sin ninguna intervención del Parlamento, cuando en la mayoría de los Estados este último es el órgano más directamente representativo del pueblo o de los pueblos que constituyen la nación. Además, la no intervención del Parlamento en algunas de las etapas ya indicadas ha dado lugar en muchas ocasiones a una utilización abusiva y discrecional del estado de excepción, de manera que, en vez de proclamarse para hacer frente a una crisis que pone en peligro la vida de la nación, el estado de excepción pasa a ser un instrumento de represión de la oposición.

54. El mismo criterio se aplica al levantamiento del estado de excepción para evitar que no se prolongue más de lo estrictamente necesario. Es indispensable que los parlamentarios velen por que las medidas adoptadas durante la crisis no se sigan aplicando posteriormente tras el anuncio oficial de que se ha dejado de aplicar el estado de excepción, pues de este modo se puede llegar, indirectamente y en forma un tanto retorcida, a un estado de excepción de facto.

55. En cuanto a las medidas adoptadas durante el período de urgencia, es imperativo que concuerden con la legalidad interna y con los tratados ratificados por el Estado, así como con los principios internacionales señalados en el párrafo 47.

56. A este respecto, el papel del Parlamento es decisivo no sólo a causa de las normas que fija o aprueba durante la crisis, sino también y sobre todo antes de ésta, y a causa de las normas que fija para que sirvan de marco jurídico a los distintos poderes del Estado para hacer frente a una crisis.

57. Como uno de los temas incluidos en el programa del Simposio se refiere a la "aplicación a nivel nacional de los instrumentos internacionales de derechos humanos", señalo particularmente a la atención de los participantes la importancia capital que reviste, sobre todo en materia de excepción, una estricta concordancia entre la norma interna y la norma internacional, en particular porque la práctica demuestra que en las situaciones excepcionales es cuando se producen las violaciones más graves de los derechos humanos.

58. Como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los estados de excepción en diversas ocasiones me ha parecido oportuno señalar a la atención de los gobiernos la existencia de discrepancias más o menos graves entre la norma interna y la internacional y además he podido comprobar la incidencia

nefasta que esas discrepancias tienen sobre el goce efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en las situaciones de urgencia.

59. Por intermedio de los servicios consultivos del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a veces algunos gobiernos han solicitado mi cooperación para introducir reformas en su legislación interna sobre el particular. Los resultados han sido alentadores y la Unión Interparlamentaria, en la que están representados la mayoría de los parlamentos del mundo, podría servir de punto de enlace, de lugar de encuentro o de intercambio e incluso de marco de consejo en el contexto de su programa de asistencia técnica a los parlamentos.

3. Rango de la norma jurídica relativa al estado de excepción

60. La experiencia indica que es sumamente conveniente que las disposiciones que rigen el estado de excepción tengan rango de norma constitucional. Así, esta institución está al amparo de posibles reformas legislativas circunstanciales que, en la mayoría de los casos, responden a las pasiones engendradas por la crisis más que a las necesidades reales provocadas por la situación de urgencia.

61. Huelga decir, por lo demás, que es sumamente importante que haya normas, también con rango de norma constitucional, que prohíban la disolución e incluso la suspensión del Parlamento durante un estado de excepción. En la mayoría de las legislaciones se prevé en forma expresa, mientras que en otras se prevé de manera indirecta disponiendo que "ninguna autoridad puede asumir funciones legislativas por existir un estado de excepción". De hecho, la finalidad de esas disposiciones, es evitar que en circunstancias excepcionales el poder ejecutivo usurpe el papel del legislativo.

62. A este respecto, conviene recordar, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva N° OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, determinó que las restricciones de los derechos que autoriza la Convención Americana de Derechos Humanos sólo se pueden decidir en función "de una ley adoptada por órganos democráticamente elegidos y con legitimidad constitucional, y siempre que sea para el bien común", o bien según una norma elaborada por el Parlamento o aprobada por él.

Preservación de las garantías, privilegios e inmunidades parlamentarias

63. El Consejo Interparlamentario y su Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios han indicado en distintas ocasiones que la protección de los derechos de los parlamentarios es condición previa indispensable para que puedan defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en su respectivo país y además que el carácter de representatividad de un Parlamento depende en gran medida del respeto de los derechos humanos de los parlamentarios que lo componen.

64. Si admitimos que una de las características más importantes del parlamentario es su función de guardián de los derechos humanos, de eso se desprende que esa función no sólo se ejerce en las situaciones ordinarias: es aún más decisiva en los períodos de crisis que son precisamente los períodos en que se suelen producir los excesos y anomalías más graves.

65. Por otra parte, la prohibición de disolver o suspender el Parlamento durante el estado de excepción, así como la preservación, en tales circunstancias, de las inmunidades y privilegios del cuerpo legislativo, sirven de garantía del pleno ejercicio del mandato parlamentario durante las situaciones de crisis y de límites precisos de las facultades que se atribuyen en circunstancias excepcionales al poder ejecutivo (que tiene excesiva tendencia a interpretarlas en forma expansiva).

66. A este respecto, la experiencia del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria es esclarecedora. Una importante proporción de las reclamaciones que recibió entre 1977 y 1993 se referían a parlamentarios de países en estado de excepción, estado que con mucha frecuencia había pasado a ser permanente por renovarse sistemáticamente durante varios meses o incluso años. En tales circunstancias, la Unión comprobó graves afrentas contra la institución parlamentaria en cuanto a tal y contra los derechos de los parlamentarios una de las más frecuentes y más graves se debe a la utilización abusiva del poder de detención sin presentar cargos y sin juicio que se suele atribuir al poder ejecutivo en circunstancias excepcionales.

B. Síntesis de los debates por la Presidencia del Simposio
Interparlamentario "El parlamento: guardián de los
derechos humanos"

1. El Parlamento en los estados de excepción

67. El Simposio recalcó que el estado de excepción, previsto en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, no debe abrir la puerta a la arbitrariedad.

68. El Simposio se refirió a una serie de principios que permiten evitar violaciones graves de los derechos humanos, como las que se produjeron en varios de los 80 países que proclamaron un estado de excepción entre 1985 y 1992.

69. Recalcó lo importante que es que el Parlamento pueda cumplir su función de declarar y levantar el estado de excepción, determinar los derechos que se pueden suspender durante el estado de excepción y controlar el ejercicio de los poderes excepcionales por las autoridades que tienen esos poderes, en particular las fuerzas de seguridad y la policía.

70. Muchos participantes señalaron que el estado de excepción debe definirse en disposiciones con rango de norma constitucional, de manera que esta institución quede al amparo de reformas legislativas circunstanciales, y recalcaron la importancia de las disposiciones que prohíben la disolución e

incluso la suspensión del Parlamento durante un estado de excepción. Con excesiva frecuencia el Parlamento es la primera víctima de la declaración del estado de excepción, ya sea en forma de una disolución pura y simple o en forma de una restricción espectacular de sus poderes legislativos.

71. Incluso si algunos participantes recalcaron que la devolución al poder ejecutivo de algunos de los poderes del Parlamento era inherente a la existencia de un estado de excepción, otros sostuvieron que el Parlamento debía conservar todos sus poderes legislativos. Esos mismos oradores insistieron en la importancia de mantener, durante un estado de excepción, las inmunidades de que disfrutaban los parlamentarios, considerando que precisamente en esas situaciones es cuando los representantes del pueblo deben poder defender, más que nunca, los derechos de sus mandatarios y deben velar especialmente por hacerlo.

72. Los participantes recalcaron que la declaración de un estado de excepción debía responder verdaderamente a una situación de crisis excepcional, tal como se prevé en la norma nacional que rige el estado de excepción. Algunos indicaron que el Parlamento y sus miembros deben vigilar en todo momento los indicios de una crisis que pueda conducir a la declaración del estado de excepción. En tal contexto, se hizo alusión en repetidas ocasiones a la necesidad de atacar de raíz los desequilibrios estructurales, sobre todo el problema de la pobreza, que con excesiva frecuencia facilita la actuación de los regímenes autoritarios. También se habló de la transparencia de las actividades políticas, y de la fluidez del intercambio de información entre políticos y fuerzas de seguridad, como garantía contra la crisis.

73. El Simposio observó que la duración del estado de excepción debería limitarse estrictamente en el tiempo, tal como había indicado en numerosas ocasiones el Consejo Interparlamentario. Varios oradores recalcaron que el Parlamento debía cerciorarse de que las facultades excepcionales conferidas a algunas autoridades a causa del estado de excepción dejaran de ejercerse a partir del momento en que se levantara el estado de excepción.

74. Varios de los participantes recalcaron también que era necesario notificar el estado de excepción a toda la población y se refirieron a la garantía que representa para la población que se informe debidamente a la comunidad internacional de la proclamación de un estado de excepción; esta notificación constituye una obligación para los Estados Partes en ciertos tratados. Un representante latinoamericano señaló que en varios países de su región, en la época en que había dictaduras militares, la no notificación del estado de excepción había contribuido a que la comunidad internacional no estuviera al corriente de la magnitud de las violaciones de los derechos humanos a que daba lugar.

75. Varios oradores señalaron además que las medidas tomadas para hacer frente a la crisis debían ser proporcionales a ésta y que diversos derechos debían mantenerse en todo momento sin posibilidad de suspenderlos. Se habló en particular del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

76. También se planteó la cuestión de la amplitud de las facultades de detención conferidas al gobierno durante un estado de excepción y la garantía que representa para cualquier detenido la obligación de ser sometido a la autoridad del poder judicial.

77. Muchos oradores repudiaron la práctica de la tortura, de la que existe un riesgo especialmente grande durante un estado de excepción cuando se confieren facultades muy amplias a las fuerzas de seguridad y a la policía.

V. ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL RELATOR ESPECIAL DE CONFORMIDAD
CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU METODO DE TRABAJO

A. Servicios de asesoramiento

Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

78. Conforme a la posición que había adoptado en sus informes sobre los estados de excepción ante los acontecimientos ocurridos en la ex Unión Soviética a raíz del intento de golpe de Estado del 19 al 21 de agosto de 1991 ^{1/}, el Relator Especial pudo visitar Moscú del 1º al 4 de septiembre de 1992, por invitación de las autoridades de la Federación de Rusia, en el marco de los servicios de asesoramiento del Centro de Derechos Humanos.

79. Durante su visita, el Relator Especial se entrevistó con varios altos funcionarios de la Federación de Rusia encargados de la cuestión de la instauración y aplicación del estado de excepción en el país. Celebró amplias entrevistas en particular en el Soviet Supremo (Parlamento), la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se reunió con parlamentarios y representantes de organizaciones no gubernamentales.

80. En todas esas entrevistas se puso de relieve la auténtica preocupación de las autoridades de la Federación de Rusia por armonizar la legislación y la práctica en materia de estados de excepción con las normas y reglas consagradas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por ese país, así como con las propuestas formuladas por el Relator Especial.

81. Se hizo referencia a varias situaciones concretas, en especial la de la República Chechena y otros lugares del Cáucaso septentrional donde las tensiones registradas podían dar lugar a situaciones de urgencia. En esa ocasión las autoridades rusas manifestaron su deseo de moderación y su voluntad de tratar ese tipo de casos procurando evitar que se agravara la situación. Por ejemplo, las medidas de urgencia decididas con respecto a la República Chechena algunos meses atrás finalmente habían sido anuladas por el poder central.

82. Por otra parte, se constató que el clima general actual propicio a los estados de urgencia, se debía en gran medida no sólo a los acontecimientos ocurridos en ciertas regiones de la propia Federación de Rusia, sino también a los conflictos en las antiguas repúblicas soviéticas a lo largo de las fronteras de la Federación, que repercutían directamente sobre la situación en esta última. Entre las consecuencias más alarmantes de este estado de cosas, cabe señalar el éxodo de una parte de la población de lengua rusa debido al aumento de la inseguridad, a las manifestaciones contra los rusos y a otras causas. Considerando el vínculo directo entre los conflictos en las fronteras

^{1/} Véanse E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, anexo II; E/CN.4/Sub.2/1992/23, párrs. 15, 16, 25 y 26.

de la Federación de Rusia y las tensiones que subsisten dentro de sus fronteras, y el vínculo entre esas situaciones y la posible adopción de medidas de excepción, el Relator Especial estima que habría que examinar la cuestión en su conjunto y así lo hará en su próximo informe. Los acontecimientos de fines de octubre de 1992 en Tayikistán, cuando se declaró el estado de excepción, vienen a confirmar esta convicción del Relator Especial.

83. En vista del carácter constructivo de los contactos entablados con ocasión de esta primera visita a la Federación de Rusia, y habida cuenta de la invitación que le han dirigido las autoridades de la República de Kirguistán, el Relator Especial opina que se está creando un marco favorable que permite el establecimiento de una cooperación útil y fructífera con las repúblicas de la ex Unión Soviética en el marco de los servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos.

B. Rectificaciones a las listas de Estados incluidos
en los informes anuales cuarto y quinto

Filipinas

84. En las listas de Estados que figuran en sus informes anuales cuarto y quinto, el Relator Especial incluyó, en relación con Filipinas, una referencia al "estado de excepción nacional proclamado el 6 de diciembre de 1989" que, según la información que tenía en su poder, estaba aún vigente (E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, párr. 2, E/CN.4/Sub.2/1992/23, párr. 12). Por carta de fecha 21 de septiembre de 1992 dirigida al Secretario General Adjunto de Derechos Humanos, la Misión Permanente de Filipinas declaró que el estado de excepción nacional proclamado el 6 de diciembre de 1989 había cesado el 7 de junio de 1990, es decir, seis meses después de su instauración, como se estipulaba en la Ley de la República N° 6826, que aprobó la Proclamación N° 503 relativa al estado de excepción nacional.

85. Por consiguiente, el Relator Especial ha introducido la corrección necesaria incorporando la información presentada por Filipinas en el presente informe anual y en la lista de Estados.

C. Carta a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

86. En respuesta a una carta del Relator Especial ^{1/}, el Presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por carta de fecha 16 de septiembre de 1992, aseguró al Relator Especial la plena cooperación de la Comisión Africana y describió el mandato y composición de ésta. Se informó al Relator Especial de que, en relación con los estados de excepción, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no contenía disposiciones específicas. Sin embargo, la Comisión se guiaba por las normas internacionales reconocidas en la esfera de los derechos humanos que regían las medidas de excepción. También se señaló que la Comisión Africana de

^{1/} Véase E/CN.4/Sub.2/1992/23, párrs. 34 a 36.

Derechos Humanos y de los Pueblos podría examinar cuestiones relacionadas con los estados de excepción, en particular al estudiar los informes de los Estados presentados con arreglo al artículo 62 de la Carta Africana o en virtud del procedimiento sobre las comunicaciones.

87. Por último, el Presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos indicó que transmitiría al Relator Especial los resúmenes de los informes de los Estados que se habían presentado hasta la fecha, teniendo presente el especial interés del Relator Especial en los regímenes de excepción.

D. Base de datos sobre los estados de excepción

88. En el párrafo 9 de la resolución 1992/22, la Subcomisión invitó al Relator Especial a mantener y ampliar sus contactos y a celebrar reuniones de consultas con instituciones y expertos técnicos apropiados con miras a recibir, almacenar y recuperar información relativa a las cuestiones pertinentes a su mandato.

89. En cumplimiento de esta disposición, el Relator Especial ha vuelto a organizar, en cooperación con el Centro de Derechos Humanos, una reunión de expertos sobre la cuestión de una base de datos sobre los estados de excepción y cuestiones de derechos humanos conexas, que se celebró el 2 y el 3 de marzo de 1993 en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra.

90. Asistieron a la reunión los representantes de la mayoría de los organismos que actualmente tienen bases de datos sobre derechos humanos o que están por crearlas, en particular la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Europa, HURIDOCs, el Centre for International and Comparative Human Rights de Belfast y el Instituto Árabe de Derechos Humanos de Túnez. Los representantes de otros órganos que no pudieron asistir, pidieron que se les mantuviera informados de la evolución de los acontecimientos, en particular del Centro de Derechos Humanos de los Países Bajos, el Centro Africano de Estudios sobre Democracia y de Derechos Humanos de Banjul y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Hong Kong.

91. Cada una de las instituciones participantes reseñó sus programas actuales y previstos y las posibles formas de cooperación. En todos los casos, la forma concreta de la base de datos había obedecido a las necesidades de sus usuarios internos y externos. Por ejemplo, las distintas bases de datos de la OIT estaban concebidas fundamentalmente para proporcionar a los funcionarios de la OIT y a los organismos participantes rápido acceso a toda la gama de convenios, decisiones e informes de la OIT y a la legislación nacional pertinente. Las bases de datos del ACNUR también se habían creado fundamentalmente para su utilización dentro de la organización y para su uso por los organismos nacionales especializados. La base de datos sobre estados de excepción de la Queens University de Belfast se estaba estructurando de manera parecida para satisfacer las necesidades concretas de los interesados en supervisar las violaciones de los derechos humanos durante los estados de excepción y situaciones conexas.

92. En general se acordó lo siguiente:

- a) que como estas bases de datos y otras servían para un propósito concreto, por el momento no sería apropiado tratar de establecer una única base de datos sobre derechos humanos;
- b) que debía hacerse todo lo posible por evitar la duplicación de esfuerzos y los gastos en reunión de datos;
- c) que los datos no confidenciales, como el texto completo de las leyes y los informes monográficos, debían registrarse de tal manera que pudieran obtenerse fácilmente para utilizarlos en otras bases de datos.

93. Los debates se centraron en la forma en que las fichas modelo de la base de datos se podrían aplicar a otras jurisdicciones, de manera que tuvieran una importancia más inmediata y más directa para los interesados en supervisar la situación de los derechos humanos y en controlar las violaciones de los derechos humanos durante los estados de excepción. El Relator Especial tenía especial interés en tener acceso inmediato a los pormenores de la constitucionalidad de la declaración de un estado de excepción. A otros les interesaba que se incluyera el máximo posible de información sobre las violaciones. Se aprobó la estrategia general de crear la base de datos a nivel regional.

94. Los demás puntos de acuerdo en cuanto a la creación de la base de datos se pueden resumir de la siguiente manera:

- a) la base de datos debía crearse siguiendo las fichas modelo preparadas en Belfast y agregando información bien fundamentada acerca del carácter y la incidencia de las violaciones de los derechos humanos;
- b) la base de datos debía ampliarse en colaboración con varios centros regionales y los distintos centros debían tratar de obtener financiación de fuentes apropiadas sobre una base de cooperación;
- c) la información contenida en las fichas debía ponerse a disposición de los círculos interesados en los derechos humanos mediante una red informatizada de acceso general en cuanto fuera posible.

95. Los participantes acordaron colaborar más para tratar de alcanzar estos objetivos y organizar otras reuniones sobre una base anual.

E. Directrices referentes a las disposiciones legislativas nacionales y a la cuestión de los derechos que no pueden ser objeto de derogación

96. Como ya se ha dicho el Relator Especial ha recibido y continúa recibiendo observaciones sumamente valiosas y pertinentes, tanto de fuentes gubernamentales como no gubernamentales, acerca del proyecto de directrices para la elaboración de disposiciones legislativas relativas a los estados de excepción; por lo que espera estar en condiciones, en sus próximos informes, de presentar un proyecto de directrices mucho más completo y acabado que el contenido en su cuarto informe anual. Algo similar podría decirse con respecto a la solicitud contenida en el párrafo 8 de la resolución 1992/22 de la Subcomisión donde se pide al Relator Especial que estudie en profundidad la cuestión de los derechos intangibles, es decir, los que no pueden ser objeto de derogación alguna, cualquiera sea la causa o la gravedad de la emergencia.

Anexo I

LISTA DE LAS RESPUESTAS Y OTRAS COMUNICACIONES RECIBIDAS*

A. Gobiernos

Armenia	10 de julio de 1992
Australia	12 de marzo de 1993
Austria	5 de marzo de 1993
Bangladesh	1º de abril de 1993
Barbados	18 de febrero de 1993
Camerún	29 de diciembre de 1992
Colombia	24 de julio y 5 de septiembre de 1992; 27 de enero y 27 de abril de 1993
Chile	28 de abril de 1993
Dominica	27 de enero de 1993
Estonia	15 de marzo de 1993
Federación de Rusia	27 de julio, 4 de noviembre y 21 de diciembre de 1992
Filipinas	21 de septiembre de 1992
Guyana	24 de marzo de 1993
Iraq	4 de marzo de 1993
Irlanda	22 de enero de 1993
Malta	17 de marzo de 1993
Mauricio	2 de marzo de 1993
México	31 de marzo de 1993
Moldova	25 de junio de 1992

* Desde julio de 1992, fecha de la publicación del quinto informe E/CN.4/Sub.2/1992/23.

Myanmar	18 de agosto, 28 de septiembre y 7 y 19 de octubre de 1992 y 22 de enero de 1993
Perú	25 de agosto de 1992
Polonia	22 de marzo de 1993
Rumania	8 de abril de 1993
Senegal	17 de marzo de 1993
Trinidad y Tabago	12 de marzo de 1993
Túnez	4 de enero de 1993
Venezuela	1º de abril de 1993

B. Organizaciones intergubernamentales

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos	16 de septiembre de 1992
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	11 de enero de 1993
Liga de los Estados Arabes	4 de abril de 1993

C. Organos de las Naciones Unidas

División de los Derechos de los Palestinos	18 de enero de 1993
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico	30 de diciembre de 1992

D. Organizaciones no gubernamentales

Amnistía Internacional	10 de marzo de 1993
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos	27 de enero de 1993

Anexo II

LISTA DE COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS RECIBIDAS
DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Egipto:	Security police detentions undermine the rule of law (MDE 12/01/92)
Indonesia/Timor oriental:	The suppression of dissent (ASA 21/09/92)
Kuwait:	Cases of "disappearance", incommunicado detention, torture and extrajudicial execution under martial law (MDE 17/02/92)
Lesotho:	Torture, political killings and abuses against trade unionists (AFR 33/01/92)
Myanmar:	"No law at all": human rights violations under military rule (ASA 16/11/92)
Perú:	Summary of Amnesty International's concerns since 1983 (AMR 46/03/92)
Perú:	Human rights during the government of President Alberto Fujimori (AMR 46/18/92)
Reino Unido:	Fair trial concerns in Northern Ireland: the right of silence (EUR 45/01/93)
República de Corea del Sur:	Amnesty International's concerns (ASA 25/14/92)
Siria:	Long-term detention and torture of political prisoners (MDE 24/12/92)
Sudáfrica:	State of fear: security force complicity in torture and political killings, 1990-1992 (AFR 53/09/92)
Turquía:	Torture, extrajudicial executions, "disappearances" (EUR 44/39/92)
